

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO**

EXPEDIENTE: SG-JDC-51/2023

PARTE ACTORA: JOSÉ RICARDO
SOTO MADUEÑO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE SINALOA

MAGISTRADO ELECTORAL:
OMAR DELGADO CHÁVEZ¹

**SECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA:** MARISOL LÓPEZ
ORTIZ²

Guadalajara, Jalisco, trece de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-51/2023, promovido por José Ricardo Soto Madueño, por derecho propio, a fin de impugnar la sentencia dictada el doce de junio pasado, por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en los expedientes TESIN-JDP-03/2023 y su acumulado TESIN-JDP-33/2023, que entre otra cuestión, se declaró incompetente para conocer y resolver los argumentos relacionados con la destitución o despido de la ahora parte actora como Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional³ en ese Estado, al formar parte de la materia laboral y no electoral y confirmó parcialmente la resolución CJ/JIN/185/2022 emitida por la Comisión de Justicia Intrapartidista del Consejo Nacional⁴ del aludido partido político, por lo que respecta a la improcedencia del juicio

¹ En acta de sesión privada de doce de marzo de dos mil veintidós, celebrada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras cuestiones, se designó provisionalmente a Omar Delgado Chávez, como **Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado**.

² Colaboró Alejandro Flores Marquez.

³ En adelante PAN.

⁴ En adelante Comisión de Justicia.

de inconformidad, al ser inexistentes los actos relativos a su destitución como Consejero Estatal y expulsión como militante.

***Palabras Clave.** Incompetencia material, materia laboral, destitución o despido, Comité Directivo Estatal, inexistencia.*

RESULTANDO

I. Antecedentes. De los hechos expuestos en la demanda, así como de las demás constancias que obran en autos se advierte:

a) Despido. El quince de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, le informó al actor que por acuerdo de la Presidenta de dicho Comité, a partir de ese momento quedaba separado de sus funciones como Secretario de Fortalecimiento Interno del indicado instituto político en la referida entidad federativa.

b) Presentación de juicio de inconformidad. En contra del referido acto, el dieciocho de noviembre siguiente, el actor presentó el juicio de inconformidad CJ/JIN/185/2022 del índice de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de ese instituto político, la cual, el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, requirió el multicitado acuerdo de destitución.

c) Primer juicio ciudadano local. El veintiocho de febrero de esta anualidad, José Ricardo Soto Madueño presentó el juicio ciudadano TESIN-JDP-03/2023 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en contra de la indicada Comisión de Justicia por la omisión de sustanciar y resolver el juicio de inconformidad CJ/JIN/185/2022.

d) Resolución del juicio de inconformidad partidista (CJ/JIN/185/2022). El quince de marzo posterior, la multicitada Comisión de Justicia, emitió la resolución CJ/JIN/185/2022 en la que

determinó por una parte, la improcedencia del juicio de inconformidad, al ser inexistentes los actos relativos a su destitución como Consejero Estatal y expulsión como militante, y por otra, declaró fundados los argumentos del actor respecto a la falta de fundamentación y motivación en virtud de la inexistencia de mandamiento por escrito respecto a la destitución como Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal.

e) Segundo juicio ciudadano local. Inconforme con dicha resolución, el veintiuno de marzo siguiente, José Ricardo Soto Madueño presentó el juicio ciudadano TESIN-JDP-33/2023 del del índice del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y al día siguiente, se ordenó la acumulación de este al diverso TESIN-JDP-03/2023; que una vez sustanciados, mediante sesión pública de resolución de nueve de junio subsecuente, se sometió a votación el proyecto de resolución propuesto por la Magistrada instructora, y al no haber sido aprobado por la mayoría se ordenó el engrose a cargo de diversa Magistrada.

II. Acto impugnado. Lo constituye la sentencia emitida el doce de junio de dos mil veintitrés, por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en los expedientes TESIN-JDP-03/2023 y su acumulado TESIN-JDP-33/2023, que entre otra cuestión, se declaró incompetente para conocer y resolver los argumentos relacionados con la destitución o despido del hoy actor como Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en ese Estado, al formar parte de la materia laboral y no electoral; y por otra parte, confirmó parcialmente la resolución CJ/JIN/185/2022 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del aludido partido político, por lo que respecta a la improcedencia del juicio de inconformidad, al ser inexistentes los actos relativos a su destitución como Consejero Estatal y expulsión como militante.

III. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

1. Presentación. En contra de la sentencia señalada, el día veinte de junio del año en curso, José Ricardo Soto Madueño, por derecho propio, presentó la demanda que dio origen al juicio que nos ocupa, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

2. Recepción, registro y turno. El veintisiete de junio siguiente, se recibieron las constancias de mérito en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional; a su vez, por acuerdo de esa fecha, la Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley Gabriela del Valle Pérez, acordó registrar el medio de impugnación como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave SG-JDC-51/2023 y turnarlo a la Ponencia a cargo del Magistrado en funciones Omar Delgado Chávez, para su sustanciación.

3. Sustanciación. Mediante diversos acuerdos, se radicó el presente juicio, se ordenó agregar al expediente el oficio y el acuerdo de turno correspondientes, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo el informe circunstanciado correspondiente, remitiendo las constancias que acreditan el trámite legal del presente medio impugnativo y haciendo constar que no compareció tercero interesado alguno; además, se admitió el juicio y se proveyeron las pruebas de la parte actora; por último, en su oportunidad, se cerró la instrucción, quedando el asunto en estado de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer del

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.⁵

Lo anterior, por tratarse de un medio de impugnación promovido por un ciudadano, contra una resolución de la autoridad jurisdiccional electoral de Sinaloa, en un juicio ciudadano local, relacionado con la supuesta destitución de diversos cargos partidistas y expulsión como militante de un partido político, supuesto y entidad federativa en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Normatividad aplicable. El presente juicio de la ciudadanía se resolverá con base en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral previa a la reforma publicada el dos de marzo en el Diario Oficial de la Federación, ya que en sesión pública⁶ celebrada el veintidós de junio del año en curso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, declaró la invalidez del decreto por el que, entre otras determinaciones había expedido la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

⁵ En términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, párrafos primero y segundo, 94, párrafos primero y quinto, así como 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164, 165, 166, párrafo primero, fracciones III, inciso c) y X, 173, párrafo primero y 176, párrafo primero, fracciones IV, inciso d) y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 párrafos 1 y 2, inciso c), 4, 6, 79, párrafo 1, 80, párrafos 1, incisos f) y g), 2 y 3, 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como los Lineamientos para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Emitidos el treinta de julio de dos mil ocho, cuya última modificación es del catorce de febrero de dos mil diecisiete; además de los puntos primero y segundo del acuerdo INE/CG329/2017, aprobado el veinte de julio de dos mil diecisiete por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. También se fundamenta el actuar de esta Sala Regional mediante los acuerdos generales de la Sala Superior de este Tribunal 3/2020 por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; y del acuerdo 4/2022, que regula las sesiones presenciales de las salas del tribunal, el uso de herramientas digitales y las medidas preventivas en el trabajo, durante la emergencia de salud pública, así como el artículo 129, párrafo segundo, del Reglamento Interno de este Tribunal.

⁶ Lo que se hace valer como un hecho notorio en términos del artículo 15. 1 de la Ley de Medios.

TERCERO. Requisitos generales de procedencia de la demanda. En el juicio en estudio, se cumplen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, 8, 9, párrafo 1, 13, 79, párrafo 1 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Forma. Se tiene por satisfecho el requisito de forma, toda vez que de conformidad con el artículo 9 de la citada ley, del escrito de demanda se desprenden el nombre de la parte actora y su firma autógrafa, que fue presentado ante la autoridad responsable, quien le dio el trámite correspondiente, además de que se hace el ofrecimiento de pruebas y, por último, se exponen los hechos y agravios que se estiman pertinentes.

b) Oportunidad. En relación al requisito de oportunidad, se aprecia que el juicio se promovió dentro del plazo a que se refiere el artículo 8, en relación con el 7, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la resolución impugnada es de doce de junio de dos mil veintitrés y fue notificada a la parte actora el catorce de junio subsecuente, mientras que la demanda fue presentada ante la autoridad responsable el veinte de junio ulterior, por lo que resulta evidente que se interpuso dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento de ésta.⁷

Ello, ya que el asunto no está relacionado con alguna elección constitucional electoral, sino con un juicio ciudadano local relativo a la supuesta destitución de la parte actora como de diversos cargos partidistas y su expulsión como militante de un partido político.

c) Legitimación e interés jurídico. La parte enjuiciante cuenta con legitimación e interés jurídico para promover el presente juicio, en términos de los artículos 13, párrafo 1, inciso b) y 79, párrafo 1, del

⁷ Sin contar el sábado diecisiete y domingo dieciocho de junio, al ser inhábiles.

ordenamiento referido, ya que es un ciudadano que comparece por derecho propio y como parte actora de los procedimientos partidario y jurisdiccional local de origen, calidad que le reconoce la autoridad responsable en los antecedentes narrados en el informe circunstanciado que obra en autos, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, inciso a), de la ley adjetiva electoral.

En lo tocante al interés jurídico, éste se colma por la parte enjuiciante, ya que combate el fallo dictado por la autoridad jurisdiccional responsable que, entre otra cuestión, se declaró incompetente para conocer y resolver los argumentos relacionados con la destitución o despido del hoy actor como Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, al formar parte de la materia laboral y no electoral, además confirmó parcialmente la resolución CJ/JIN/185/2022 emitida por la Comisión de Justicia Intrapartidista del Consejo Nacional del aludido partido político, por lo que respecta a la improcedencia del juicio de inconformidad, al ser inexistentes los actos relativos a su destitución como Consejero Estatal y expulsión como militante, lo cual resulta adverso a los intereses del ahora actor, al haber sido parte actora en los procedimientos partidario y jurisdiccional local de origen.

d) Definitividad y firmeza. En el juicio señalado al rubro, se estima satisfecho el requisito de procedencia relativo al principio de definitividad, toda vez que, en la legislación electoral del Estado de Sinaloa, no se contempla la procedencia de algún medio de defensa ordinario por el que se pueda modificar o revocar la determinación controvertida.

En consecuencia, al estar colmados los requisitos de procedencia del medio de impugnación que se resuelve, y que, en la especie, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o de sobreseimiento

previstas en la ley adjetiva general de la materia, lo conducente es estudiar los conceptos de agravio expresados en el escrito de demanda respectivo.

CUARTO. Síntesis de agravios. De la demanda, se advierte que la parte promovente hace valer los siguientes motivos de disenso.

1. Refiere que la sentencia impugnada carece de congruencia interna y externa, pues de su simple lectura se advierte la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, ya que la responsable se pronunció sobre cuestiones que no fueron materia de la controversia, porque en ningún momento pidió se analizara sobre su destitución como Consejero Estatal del PAN en Sinaloa, ni sobre su expulsión como militante del PAN, sino que su argumento versó sobre la falta de claridad y congruencia de la resolución de la Comisión de Justicia.

2. Aduce una inexacta interpretación del artículo 116 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN, al declarar infundados sus agravios basándose en el contenido de dicho artículo, pero sin especificar cuál de los requisitos se incumplió para aplicar el último párrafo del precepto.

3. Señala que es irresponsable dar por hecho que los actos no existen simplemente porque fueron negados por quien fuera señalada como responsable en dicha instancia, lo que vuelve la resolución oscura, carente de claridad, confusa y de no dotar seguridad jurídica, pues no motiva ni funda el por qué podría tener razón la responsable en dicha instancia, ni explica por qué la inexistencia de los actos reclamados, no implicarían una violación a sus derechos.

4. Sostiene, que existe una indebida fundamentación y motivación, pues se limita a decir que se declararon inexistentes dos de los tres agravios (sic) vertidos, omitiendo la aplicación del artículo 44 de los Estatutos

Generales del PAN, sin aclarar que la inexistencia de los hechos es por la insuficiencia de facultades de la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, para removerle de cualquiera de los tres cargos que ostenta.

5. A su decir, resulta aplicable el razonamiento que para tal efecto emitió la Magistrada Aida Inzunza Cazares en el voto particular que formuló a la sentencia impugnada, quien, a su decir, entiende que lo reclamado en dicha instancia fue la falta de claridad y certeza en la resolución, la indebida fundamentación y motivación que no garantizó su acceso a la justicia. Para ello realiza una transcripción de una parte del voto particular.

6. Refiere le causa afectación que se declare fundado el agravio reconocido como existente, pero que en la parte de los efectos pareciera que se le da la razón a la responsable, ello porque una vez que declaró fundado su agravio, la Comisión de Justicia responsable hace una invitación a la Presidenta del Comité Directivo Estatal a subsanar las violaciones denunciadas, siendo contradictorios en su caso los considerandos QUINTO y SEXTO, pues a su decir lo procedente debió ser declarar la falta de facultades de la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN para removerlo de cualquiera de los tres cargos que ostenta, y retrotraer todo a como estaba antes de haber generado el agravio que se declara infundado.

7. Continúa refiriendo la incongruencia del Tribunal local al haberse declarado parcialmente incompetente e introducir términos de la rama laboral, cuando en ningún momento hizo mención a sus derechos laborales, ello porque de los agravios que expuso, únicamente reclamó derechos partidistas y no así de índole laboral, ya que jamás hizo mención a una “prestación de servicios”, “subordinación”, ni “remuneración o salario”; de ahí que estime una inexacta interpretación del Tribunal local

respecto de sus agravios expuestos que lo llevó a declarar una indebida incompetencia parcial.

Además, aduce en todo caso que, su designación al cargo de Secretario de Fortalecimiento Interno, en realidad se trata de una elección partidista, pues si bien se designa a propuesta del Presidente del Comité Directivo Estatal, este nombramiento debe ser aprobado por los integrantes del Comité y posteriormente por la Comisión Permanente Estatal quien es el órgano de mayor jerarquía en el Estado, por lo que para ser designado se sigue un procedimiento de varios filtros, además de que debe cumplir con ciertos requisitos, lo cual lo vuelve un proceso de elección.

8. Sostiene que el Tribunal responsable es omiso en estudiar un agravio, en el que se planteó que la sentencia CJ/JIN/185/2022, al declarar fundado el diverso agravio de haberlo separado indebidamente de sus funciones como Secretario de Fortalecimiento Interno, de manera errónea dio oportunidad a la Presidenta del Comité Directivo Estatal responsable, de subsanar sus irregularidades y perfeccionar los actos reclamados, cuando lo pertinente debió ser analizar los disensos planteados en esa primera impugnación.

9. Finalmente, sostiene que ni el Tribunal responsable ni la Comisión de Justicia valoraron el argumento de que la única instancia facultada para privar de un cargo partidista es la Comisión de Orden y Disciplina Partidaria según lo refieren los propios Estatutos del PAN en sus artículos 128, 129 y 130.

QUINTO. Metodología de estudio. Los motivos de reproche serán analizados en el orden en que fueron expuestos en la síntesis de agravios que antecede, ello en el entendido de que lo relevante es que se estudie la totalidad de los disensos hechos valer. Lo anterior de conformidad con la

Jurisprudencia 04/2000, de la Sala Superior, de rubro “**AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**”.⁸

SEXTO. Análisis de fondo. Los agravios expuestos por el actor resultan **parcialmente fundados** y lo procedente es **revocar** la resolución combatida, en razón de las consideraciones siguientes.

1. En cuanto al **primer** motivo de reproche, en el que alega la falta de congruencia interna y externa de la sentencia impugnada, toda vez que el tribunal responsable se pronunció sobre cuestiones que no le fueron planteadas, ya que no se le solicitó analizara su destitución como Consejero Estatal del PAN en Sinaloa ni sobre su expulsión como militante del partido, sino que únicamente alegó la falta de claridad y congruencia de la resolución de la Comisión de Justicia; se considera **infundado**.

Lo anterior es así, ya que de la revisión que esta Sala efectúa a la demanda primigenia, es posible advertir que el hoy actor expuso dos agravios en los que en esencia reclamó:

1. Que sí existe una afectación a su interés jurídico por la inexacta aplicación del artículo 117, fracción I, del Reglamento de Selección de Candidaturas, por parte de la Comisión de Justicia, ya que a su decir, sí existe el acto impugnado, pues alegó que la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, le privó de su cargo de Consejero Estatal, Secretario de Fortalecimiento Interno y Miembro del Partido, lo cual se acredita con el reconocimiento y manifestación que hace en el informe complementario rendido ante la autoridad partidista.

Que la responsable confunde la existencia del acto reclamado con las formalidades que el mismo debe llevar, que, si bien la carga de demostrar la existencia del acto le corresponde, este se demuestra con la confesión de su existencia por parte de la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado e informe complementario.

⁸ Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, y consultable en la página de internet <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/>

Que la Comisión de Justicia omita pronunciarse sobre un agravio relativo a que no se respetó el debido proceso legal, ni se le notificó procedimiento alguno o las causas que motivaran la privación de sus cargos partidistas.

2. Violación a los artículos 16 y 17 de la Constitución federal, por la falta de congruencia en su resolución, ello porque entra al estudio de la indebida fundamentación y motivación de un acto que declaró inexistente; concluyendo que, como el acto no fue realizado ni notificado por escrito, en consecuencia, está indebidamente fundado y motivado, siendo que no es posible declarar y resolver que un acto no existe y luego decir que está indebidamente fundado y motivado.

Adicionalmente alega la negativa a una tutela judicial efectiva por no resolverle el fondo de la cuestión planteada e instruyendo a la responsable para que mejore el acto reclamado y corrija sus omisiones.

Así, es posible advertir que, en el primero de los disensos de la demanda local, el enjuiciante sí expresó argumentos en los que solicitó se analizara su destitución de los cargos de Consejero Estatal, Secretario de Fortalecimiento Interno y militante del partido Acción Nacional, ello porque adujo la existencia de los actos atribuidos a la Presidenta del Comité Directivo Estatal, al sostener que se acreditaban con el reconocimiento que de ello hizo la responsable al rendir diversos informes ante la Comisión de Justicia.

Luego, queda acreditado que su intención versaba en que el Tribunal local reconociera la existencia de los tres actos reclamados y en consecuencia analizara sobre la legalidad o ilegalidad de esas destituciones; y no solo sobre la falta de claridad y congruencia en el fallo de la Comisión de Justicia, que, dicho sea de paso, eso lo argumentó hasta su segundo agravio.

De ahí que esta Sala considere **infundado** su motivo de reproche, pues el Tribunal local no comete una falta de incongruencia externa,⁹ ya que no solo le fue planteado el aspecto de la falta de claridad en la resolución controvertida, sino que sí manifestó alegatos referentes a la destitución de sus cargos partidistas.

2. Respecto al **segundo** motivo de disenso, en el que medularmente sostiene la inexacta interpretación del artículo 116 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN, ello por declarar infundados sus agravios basándose en el contenido de dicho artículo, pero sin especificar cuál de los requisitos se incumplió para aplicar el último párrafo del precepto; se considera **inoperante**.

En la sentencia controvertida, hay un capítulo denominado “Marco Jurídico”, en donde señaló como precepto aplicable el numeral 116, primer párrafo, fracción IV, del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular del PAN, en ella se advierte una interpretación de los alcances de dicho numeral en el siguiente sentido:

“... El artículo 116, primer párrafo, fracción IV, del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular del PAN, dispone que es un requisito de la demanda, el señalar el acto o resolución que se impugna.

Tal requisito no debe entenderse únicamente desde un punto de vista formal como la simple mención en el escrito de demanda de un acto (positivo o negativo), sino también en un sentido material, que implica la existencia misma en el mundo fáctico del acto reclamado, de manera que, si no existe el acto, con las referidas características no se justifica la instauración del juicio.

Por lo que, tanto la ausencia de un señalamiento directo del acto reclamado, como **su inexistencia material advertida del análisis integral de la demanda y las constancias, impide al órgano jurisdiccional avocarse a su conocimiento**, generando con ello la improcedencia del juicio.

⁹ Cobra aplicación la Jurisprudencia 28/2009, de rubro: “**CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA**”, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24.

A su vez, el último párrafo del mismo precepto reglamentario prevé que cuando se incumpla algún requisito de la demanda, se desechará de plano la demanda...”

De lo anterior, se aprecia que la responsable hace una interpretación del aludido numeral para referir que no basta con el señalamiento en la demanda de la existencia de determinado acto, sino que es necesario que materialmente exista en el “mundo fáctico”, ello porque a su decir, si no existe materialmente, entonces no se justifica la interposición de un juicio y por ende se actualiza el incumplimiento de uno de los requisitos de demanda que señala tal numeral, por lo que válidamente procedería su desechamiento.

Cabe señalar, que tal interpretación la realizó a fin de dar congruencia con lo que más adelante determinó en el análisis de fondo de su sentencia, en donde expresó:

“...En ese orden de ideas, si bien se comparte la afirmación de la responsable en que los actos consistentes en la destitución como consejero y la expulsión como militante son inexistentes. Sin embargo, **debió desechar esa parte de la demanda por la causal de improcedencia consistente en la inexistencia de los actos reclamados**, y no por falta de interés jurídico, **de conformidad con el último párrafo del artículo 116, en relación con el primer párrafo, fracción IV del mismo precepto**, del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección popular del PAN...”

Esto es, para el Tribunal los actos reclamados (destitución como Consejero y expulsión como militante) en efecto eran inexistentes, pero a su consideración la causal de improcedencia que resultaba aplicable, no era la falta de interés jurídico referida en el artículo 117, fracción I, inciso a), sino la de inexistencia del acto reclamado que contempla el artículo 116, último párrafo, en relación con la fracción IV, primer párrafo, de dicho numeral.

Por ende, la interpretación que realizó en el capítulo denominado “Marco Jurídico”, no es inexacta, sino que resulta congruente y acorde con la conclusión que pretendió sostener en su análisis de fondo.

Aunado, que tal interpretación no cambia el hecho de que para el Tribunal fuera correcta la decisión de la Comisión de Justicia, pues no se acreditaba la existencia de dichos actos, tomando como base para ello la negativa de la presidenta del Comité Directivo Estatal y que no había mayor documentación que demostrara su existencia, por lo que el alcance dado al precepto invocado resulta intrascendente.

3. Por lo que refiere al agravio señalado como **tercero** en la síntesis de esta sentencia, en donde alega la oscuridad del fallo combatido, ya que no motiva ni funda porque la Comisión de Justicia podría tener razón al referir que los actos no existen simplemente porque fueron negados por la autoridad responsable en dicha instancia (Presidenta del Comité Directivo Estatal); ni tampoco explica por qué la sola inexistencia de los actos no le implican una violación a sus derechos; resulta **infundado** en una parte e **inoperante** en otra, como a continuación se explica.

Es infundado porque el Tribunal sí menciona en su sentencia, que si la Presidenta del Comité Directivo Estatal negó la existencia de los actos consistentes en la destitución de su cargo como Consejero y la expulsión como militante del partido, y no obraba otra constancia en el expediente con la que se acreditara su existencia entonces resultaba acertado lo resuelto por la Comisión de Justicia respecto a que los mismos eran inexistentes.

Justificó su conclusión al referir que se basaba en un principio general de derecho que es: “El que afirma está obligado a probar”, por lo que, a su consideración, el actor contaba con la carga de la prueba para demostrar sus afirmaciones respecto de la existencia de los actos, es decir, a

consideración del Tribunal, el actor debió ofrecer alguna probanza para demostrar su existencia, cuestión que no ocurrió.

Tales afirmaciones constituyen la motivación que alude hace falta, pues el órgano responsable sí expresa los argumentos con los que sostiene su decisión, de manera que no se actualiza la oscuridad en el fallo, de ahí que no le asista la razón al compareciente.

Por otro lado, el disenso también resulta **inoperante**, en cuanto a que no se explica por qué la sola inexistencia de los actos no le implican una violación a sus derechos; lo anterior pues parte de una premisa falsa,¹⁰ ya que, si no existe de manera tangible un acto u omisión que genere una lesión o afectación a sus derechos o intereses, no es posible acreditar la materialización del daño y por tanto no es posible condenar a una reparación del mismo, ya que no se demuestra la lesión de la que asegura ser víctima.

Por tanto, no es necesario que las autoridades responsables razonen, cómo es que, la inexistencia de determinados actos realmente no genera daño alguno al justiciable, pues precisamente el hecho de que no existan jurídicamente hablando, implica que no existe ni puede generarse una afectación.

Incluso, la propia negativa del órgano responsable implicaba una afirmación consistente en que sí está vigente en sus derechos, situación que revertía la carga probatoria en contra de la parte actora, quien tenía a su alcance demostrar que no aparece, por lo menos, en el padrón de militantes del partido.

¹⁰ Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 108/2012 (10a.), de rubro: “**AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS**”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, página 1326.

4. Ahora, en cuanto al agravio indicado como **cuarto**, en donde se reclama la indebida fundamentación y motivación de la sentencia, ya que omitió la aplicación del artículo 44, de los Estatutos Generales del PAN, y sin que en su caso advirtiera que la existencia de los hechos es por la insuficiencia de facultades de la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, para removerle de cualquiera de los tres cargos que ostenta dentro del partido; se considera **inoperante**.

El anterior calificativo surge derivado de lo novedoso de sus argumentos, ello, porque de la revisión que esta Sala efectúa a la demanda local, no se puede advertir la aplicación indebida o su omisión, del artículo 44 de los Estatutos Generales del PAN, tampoco refiere la insuficiencia de facultades de la Presidenta del Comité Directivo Estatal, para removerle de sus cargos.

Ello, pues únicamente señaló en esencia, los siguientes agravios: **a)** la existencia de los actos impugnados (privación como Consejero Estatal, como Secretario de Fortalecimiento Interno, y como Militante del Partido), derivado del reconocimiento de la responsable primigenia en el informe complementario que rindió ante la Comisión de Justicia; **b)** Se demuestra la existencia de los actos con la confesión que realiza la Presidenta del Comité Directivo Estatal mediante los informes rendidos; **c)** la incongruencia de la resolución partidista por estudiar la indebida fundamentación y motivación de actos que declaró inexistentes; y **d)** la negativa a una tutela judicial efectiva por no resolver el fondo de lo planteado.

De ahí que, ante lo novedoso de sus manifestaciones, es que las mismas se califiquen de **inoperantes**.¹¹

¹¹ Cobra aplicación el criterio contenido en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 18/2014 (10a.), de rubro: “**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE**

5. En relación con el disenso número **cinco** de esta sentencia, en donde indica, que en el caso es aplicable lo argumentado por la Magistrada Aida Inzunza Cazares en el voto particular que formuló a la sentencia impugnada, ya que esta entiende que lo reclamado fue la falta de claridad y certeza, indebida fundamentación y motivación y que no se garantizó el acceso a la justicia en la resolución de la Comisión de Justicia; se estima **inoperante**.

Lo anterior es así, porque en esencia, este argumento hace alusión a que su pretensión era combatir única y exclusivamente la falta de claridad y certeza de la resolución de la Comisión de Justicia; sin embargo, en el análisis brindado al agravio primero de este fallo, ya se razonó cual fue el contenido de su demanda, y lo que en ella se planteó al Tribunal local; de manera que esta nueva posición, en la que insiste que su reclamo fue la “falta de claridad” de la resolución impugnada en dicha instancia, deviene **inoperante** por pender de otro agravio que fue previamente desestimado.¹²

Por otra parte, en cuanto a la transcripción que realiza del voto particular formulado por la Magistrada Electoral local disidente, se considera igualmente **inoperante**, pues no resulta válido la adopción literal de los planteamientos señalados en el voto para la formulación de su argumento, pues si bien, sus agravios puede coincidir con lo sostenido en el criterio de la Magistrada disidente, lo cierto es que existe una mínima carga para el ocurrente de formular genuinamente sus planteamientos, sin que sea viable la transcripción literal del voto particular o su traslado en la

CONSTITUCIONALIDAD.”, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 750.

¹² Resulta aplicable la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de rubro: “**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS**”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, abril de 2005, página 1154.

formulación de agravios, pues este no constituye jurídicamente un concepto de violación, sino una mera alegación en su favor.¹³

6. Ahora, en cuanto al motivo de disenso enumerado como **sexto** de la síntesis de agravios, en donde plantea, que el hecho de declarar fundado el agravio señalado como “existente”, y que en la parte de los efectos, se le esté dando la razón a la responsable, pues se le hace una invitación a la Presidenta del Comité Directivo Estatal para subsanar las violaciones denunciadas, lo que a su decir es contradictorio, pues en todo caso debió declararse la falta de facultades de dicha Presidenta para removerlo de sus cargos partidistas; se considera **inoperante**.

Lo anterior es así, pues se advierte que dicho motivo de reproche, en realidad está combatiendo los argumentos planteados por la Comisión de Justicia en la resolución del juicio de inconformidad partidista, y no así en contra del acto impugnado en esta instancia federal que es la sentencia emitida por el Tribunal local responsable; por ende, se estima que su agravio en realidad no combate de manera frontal los argumentos vertidos por la aquí responsable, de ahí que su reproche resulte **inoperante**.¹⁴

7. Respecto del disenso indicado como **séptimo** en este fallo, en el cual se duele de la incongruencia de la sentencia, por haberse declarado el Tribunal local parcialmente incompetente, ya que, en ningún momento en su demanda, se hizo mención de sus derechos laborales, sino únicamente a sus derechos partidistas; se considera **fundado**.

¹³ Cobra aplicación a lo anterior, las tesis aisladas 370322, de rubro: “**CONCEPTOS DE VIOLACION, MAL EXPRESADOS**”, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCVII, página 1824; y 253616, de rubro: “**VOTO PARTICULAR, INEFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS EN EL**”, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 91-96, Sexta Parte, página 269.

¹⁴ Cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/15, de rubro: “**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA**”, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Julio de 2000, página 62.

Del análisis a la demanda local, se puede apreciar en efecto, que la parte actora no hace referencia a la violación de derechos laborales, sino que aduce violaciones a sus derechos partidistas a la luz de una posible resolución incongruente emitida por la Comisión de Justicia.

No obstante, en la sentencia combatida ante este órgano federal, se aprecia que el Tribunal responsable al momento de analizar el acto impugnado en dicha sede -esto es la resolución al juicio de inconformidad CJ/JIN/185/2022 de la Comisión de Justicia-, realiza implícitamente una escisión de la demanda, ya que, si bien el acto impugnado fue la totalidad de la resolución al juicio de inconformidad, lo cierto es que, en él se analizaron tres actos reclamados distintos:

- a) La destitución del cargo como Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa;
- b) La destitución como Consejero Estatal del PAN en Sinaloa; y
- c) La expulsión como militante del Partido Acción Nacional.

Es decir, la inconformidad en origen, no se constreñía a un solo acto sino a tres de distinta naturaleza, cuestión que advirtió el Tribunal responsable, de manera que, aunque su competencia formal se centraba en dilucidar la legalidad o ilegalidad de la resolución al juicio de inconformidad, lo cierto es que no podía revocarlo o confirmarlo en su totalidad sin impactar en los actos originalmente impugnados.

Ahora bien, el Tribunal procedió a realizar un análisis oficioso de la naturaleza de dichos actos (3), en donde afirmó que uno de ellos el concerniente a la destitución del cargo como Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, era de naturaleza laboral, lo anterior porque el mismo estaba relacionado con el despido del actor a dicho cargo, y que en el caso, la relación jurídica del accionante con el partido político sí correspondía a una de

naturaleza laboral, ya que para el desempeño del puesto que ocupaba se configuraban los elementos de prestación personal de un servicio, subordinación y remuneración o salario.

Cuestión con la que esta Sala no es coincidente, pues si bien existe un contrato individual de trabajo, firmado por el hoy actor, en donde se especifica que éste se desempeñaría en el puesto de Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, y realizaría las tareas que reglamentariamente tenía asignadas conforme a los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y el Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales de dicho partido; que sus funciones serían por un periodo determinado; además de que en las cláusulas del contrato en todo momento se le menciona como “el trabajador”; se describen las labores que corresponden al puesto; los días de descanso y periodos vacacionales a que tendría derecho; el pago de aguinaldo; el pago de un salario pactado; y su subordinación a un jefe inmediato a quien debía reportar de sus funciones; lo cierto es que este derivo de un procedimiento seguido ante los órganos de dirección estatales partidistas para cubrir una secretaría que coadyuva a las funciones del Comité Directivo Estatal.

Es cierto que dadas las características del contrato para el desempeño del puesto de Secretario de Fortalecimiento Interno, es posible advertir que en efecto, dicho documento corresponde a uno de naturaleza laboral; sin embargo la responsable debió enfocarse a estudiar, no sólo si la designación fue mediante un procedimiento de elección partidista entre los miembros del Comité Directivo Estatal, toda vez que más que una elección se trata de una designación directa de un puesto -posiblemente de confianza o no- a propuesta del Presidente del Comité Directivo Estatal que en su caso debe ser validado por el pleno del Comité Directivo Estatal y ratificado por la Comisión Permanente Estatal, pero no mediante el ejercicio del voto universal, sino conforme a las disposiciones que

refieren los numerales 40, inciso a) y b), 75, incisos a) y b), y 76, inciso c), del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del PAN.

Lo cual es una designación que corresponde a las facultades que tienen el Comité Directivo Estatal y la Comisión Permanente Estatal como parte de sus funciones, a fin de designar a los titulares de las diversas secretarías, comisiones y dependencias del Comité, entre las cuales se encuentra la de fortalecimiento interno, como parte o derivado del derecho de asociación política de sus militantes.

Esto es, el propio reglamento interno del partido posibilita la configuración de secretarías, enunciando mínimamente la de Secretaría de Fortalecimiento Interno, entre otras.

En ese tenor, debió asumir competencia electoral pues dicho cargo, es considerado dentro de la estructura básica de un comité directivo estatal.

Según se advierte del acta de instalación de la comisión permanente estatal del PAN¹⁵, se propuso la conformación de las secretarías y personas titulares de las mismas para el Comité Directivo Estatal del PAN, y posteriormente la votación respectiva, existiendo algunas manifestaciones en el sentido de que:

evidentemente puede haber más secretarías, coordinaciones y direcciones, lo que el partido y la presidencia del Comité Estatal disponga; pero, en el espíritu del artículo, si se encuentra precisamente las secretarías mínimas y necesarias para el buen funcionamiento del Partido; considerando que es una obligación que se deba tener la Secretaría de Acción de Gobierno. Solicitando que lo anterior quede asentado en el acta.

Consecuentemente, debió procederse a un análisis de fondo para determinar si la presunta destitución de la parte actora conlleva la

¹⁵ Fojas 86 a la 102 del cuaderno accesorio único.

restricción de sus derechos como militante partidista o es independiente de ello, así como incluso la naturaleza de dicho puesto, y el derecho preponderante que regiría las posibles causas de terminación, cambio o destitución del cargo.

De ahí que la determinación del Tribunal local de declararse incompetente exclusivamente del acto consistente en la destitución del cargo como Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa es incorrecta, y se avocara a conocer únicamente de la supuesta destitución como Consejero Estatal y su expulsión como militante del partido.

Pues debió realizar un análisis integral de la normas estatutaria y reglamentarias del PAN, así como de los documentos por los cuales se origina la ocupación de dicha secretaría, la situación de terminación del mismo, y el acto de la comisión de justicia partidista -quien inicialmente se declaró competente e incluso en los efectos se relaciona con sustentar la causa de terminación o destitución¹⁶- para determinar si era tutelable o no dentro del derecho electoral, y en su caso, si le asiste o no la razón a la parte actora con relación a su pretensión y causa de pedir.

De otra manera, bajo el principal argumento del tribunal responsable, bastaría que un cargo partidista no sea electivo para considerarlo de naturaleza laboral, excluyendo lo electoral, lo que implicaría una restricción al derecho político-electoral de afiliación¹⁷, en su vertiente de participación dentro de un partido político¹⁸.

¹⁶ Fojas 178 y 181 vuelta del cuaderno accesorio único.

¹⁷ Tesis relevante XXI/99. **“DERECHO DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ALCANCES”**. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 42; Jurisprudencia 36/2002. **“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN”**. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41; y, Jurisprudencia 24/2002. **“DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES”**. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 19 y 20.

En ese sentido, debió establecer si las funciones, naturaleza, finalidades así como requisitos para ocupar dicho cargo, pueden ser protegidos en la vertiente político-electoral, más allá de la forma en que la parte actora denominó al acto por el cual cesó o terminó la ocupación de dicha secretaría.

Así lo **fundado** de su disenso.

8. Ahora, por lo que respecta al agravio **octavo** de la síntesis de este fallo, en donde sostiene que el responsable es omiso en estudiar un agravio, en donde se le planteó que indebidamente se dio oportunidad a la Presidenta del Comité Directivo Estatal de subsanar sus irregularidades y perfeccionar los actos reclamados; se considera **inoperante**.

Ello debido a que, si el Tribunal local se declaró incompetente para conocer de cualquier tema relacionado con la destitución del cargo de Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, entonces se encontraba impedido para emitir razonamiento alguno respecto de los efectos que la resolución de la Comisión de Justicia hizo al respecto.

Pero con independencia de lo anterior, lo cierto es que el órgano responsable sustentó lo que ahora se reclama en la inexistencia de un mandato o acto de molestia por escrito, y la notificación respectiva del mismo; situación reconocida por la parte actora como motivo de agravio al indicar que el origen de la controversia era derivado de situaciones expresadas de manera verbal.

¹⁸ También conocido como derecho al desempeño de un cargo partidista, en los cuales si bien no corresponden al PAN, en los precedentes que se cita a continuación resultaba tutelable la falta de pago por cargos derivados de designación, principalmente: SX-JDC-131/2023, SX-JDC-102/2023, SX-JDC-40/2023, SX-JDC-39/2023, SM-JDC-995/2021 y SX-JDC-78/2021.

Así, dicha tesis principal no es controvertida sino expuestos otros argumentos que no atacan lo esencial de la decisión sobre este aspecto de la comisión partidista, por lo cual aun cuando hubiese sido declarado fundado este aspecto por la Sala Regional, no produciría los efectos deseados al basarse sus argumentos en situaciones que dejan subsistentes las razones torales del acto reclamado, por lo que refiere a este punto.

9. Finalmente, en cuanto al disenso marcado como **noveno**, en donde se duele de que ni el Tribunal responsable ni la Comisión de Justicia valoraron el argumento de que la única instancia facultada para privar de un cargo partidista es la Comisión de Orden y Disciplina Partidaria, según lo refieren los Estatutos del PAN; se estima **inoperante**.

Lo anterior es así, ya que dicho planteamiento resulta novedoso, pues del análisis a la demanda local, solo refiere que no fue analizado el alegato de que la Presidenta del Comité Directivo Estatal transgredía lo dispuesto en los artículos 128, 129 y 130 de los Estatutos, por no respetar el debido proceso legal ni su derecho de audiencia y defensa; pero en ningún momento, por lo menos en esa instancia estatal, hizo alusión a la falta de competencia para sancionarle y que en su caso la única facultada para ello era la Comisión de Orden y Disciplina Partidaria.

Es decir, esa precisión de que otra Comisión diversa era la única competente para sancionarle con la destitución de diversos cargos no lo alegó categóricamente en su demanda local, de modo que el Tribunal estatal estaba impedido para emitir un pronunciamiento respecto de un argumento que no le fue formalmente planteado; de ahí que el mismo se torne novedoso y por ende **inoperante**.¹⁹

¹⁹ Cobra aplicación el criterio contenido en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 18/2014 (10a.), de rubro: “**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD.**”, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 750.

SÉPTIMO. Efectos. Ante lo fundado de uno de sus agravios, lo procedente es **revocar** la sentencia del Tribunal local responsable para que, en consideración de las razones expuestas, emita una nueva resolución en la cual, por una parte, reitere los razonamientos que confirman la inexistencia de dos actos (destitución como Consejero Estatal y su expulsión como militante del Partido Acción Nacional), y por otra, asumiendo competencia formal, determine si lo reclamado respecto al cargo de la Secretaría de Fortalecimiento Interno es analizable en materia electoral, y en su caso, si son eficaces o ineficaces los reclamos de la parte actora.

Lo anterior deberá realizarse dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, y dentro de las veinticuatro horas de que ello ocurra, deberá enviar las constancias que así lo acrediten a esta Sala Regional, junto con las notificaciones realizadas a las partes.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional,

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se **revoca** la resolución impugnada por las razones y para los efectos precisados en este fallo.

NOTIFÍQUESE en términos de ley; y en su caso, devuélvanse las constancias atinentes previa copia digitalizada que se deje en su lugar en un dispositivo de almacenamiento de datos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por **unanimidad** de votos, el Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, la Magistrada Gabriela del Valle Pérez y

el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado Omar Delgado Chávez, todos integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos Teresa Mejía Contreras, quien certifica la votación obtenida, así como da fe que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto, así como el transitorio segundo, del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; y el artículo cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 4/2022, por el que se regula las sesiones presenciales de las salas del tribunal, el uso de las herramientas digitales y las medidas preventivas en el trabajo, durante la emergencia de salud pública.